AMPARO EN REVISIÓN 278/2022
QUEJOSA Y RECURRENTE:

Vo. Bo.
Ministra

PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

**SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS,
JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y
JOSÉ LUIS MEDEL GARCÍA**

Hechos relevantes y/o contexto

El primero de junio de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, cuyos objetivos esenciales, consisten en establecer las base de coordinación de los gobiernos de todos los niveles en materia de bibliotecas públicas, definir las políticas de su establecimiento, sostenimiento y organización, definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas, fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado, fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental y regular los términos del depósito legal.

En contra de esa Ley General, la persona jurídica promovió una demanda de amparo en la que controvertió que la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional porque:

- La Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual por no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor y cuerpos normativos afines a la materia, y no prever medidas de tecnológicas de protección, y por violar la normal explotación de la obra.
- La entrega de copias digitales para su divulgación en las redes implementadas para los depositarios carece de controles para evitar el uso ilegal de los materiales, por lo que se viola los derechos patrimoniales de los autores y editores.
- La entrega de los ejemplares publicados en formato electrónico, analógico o digital, prevista en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley General de Bibliotecas, vulnera el principio de autorización previo a la divulgación y consecuente retribución.
- El artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional al prever una multa fija y por tanto excesiva en caso de incumplimiento de entrega de los ejemplares relativos al depósito legal que prevé el artículo 37 de la misma ley.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

El juez de distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio al determinar que la quejosa no demostró encontrarse en los supuestos para que le afectara la entrada en vigor de la mencionada ley.

Esa persona jurídica interpuso un recurso de revisión en el que, controvirtió el sobreseimiento y las razones por las que el juzgado negó el amparo.

El correspondiente tribunal colegiado confirmó el sobreseimiento por la norma que prevé la multa y declaró carecer de competencia para resolver el aspecto de constitucionalidad y por ende remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos por resolver por esta Primera Sala consisten en determinar si:

- La Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual por no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y no prever medidas tecnológicas de protección respecto a la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas; y
- Si la entrega de los ejemplares digitales para consulta y no sólo para depósito, respeta los principios de autorización previa del autor.

Decisión judicial

La Ley General de Bibliotecas es constitucional.

Para arribar a esa conclusión se desarrollan los apartados siguientes:

- A.** Determinar si la Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual al no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la normativa internacional, y no prever medidas tecnológicas de protección, en relación con la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas.
- B.** Determinar si la entrega de los ejemplares para consulta y no sólo para depósito respeta los principios de autorización previa del autor.

La Ley General de Bibliotecas establece que las políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública del material que integra al Depositorio Legal, se regulará con base en las disposiciones aplicables.

En ese sentido, debe entenderse que las obras encuentran protección en la Ley Federal del Derecho de Autor. De ahí que se llegue a la conclusión que no exista una omisión legislativa de regulación sobre la protección de la entrega del material en formato digital.

En ese mismo sentido, se concluye que la Ley Federal del Derecho de Autor, como legislación aplicable y regulatoria de los derechos de los autores, conforme lo ordena la ley impugnada, establece el derecho de los autores a determinar si su obra será divulgada, y de autorizar, en su caso, la publicación de este, así como las medidas que se deberán implementar para su consulta, de ahí que no se vulnere el principio de autorización del autor.

ÍNDICE TEMÁTICO

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
I	COMPETENCIA	La Primera Sala es competente para conocer del presente asunto porque se trata del reclamo de la Ley General de Bibliotecas, es materia administrativa y ambas salas son competentes para conocer de ese tipo de asuntos.	11
II	OPORTUNIDAD	Es un presupuesto examinado por el tribunal colegiado que no amerita mayor pronunciamiento.	12
III	LEGITIMACIÓN	Es un presupuesto examinado por el tribunal colegiado que no amerita mayor pronunciamiento.	12
IV	PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN	El recurso de revisión es procedente en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en un juicio de amparo en el que se contravirtió la constitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas.	13
V	CAUSAS DE IMPROCEDENCIA	No se advierten causas de improcedencia distintas a las examinadas por el Tribunal Colegiado.	13
VI	ESTUDIO DE FONDO	Los problemas jurídicos por resolver por esta Primera Sala consisten en determinar si: - La Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual por no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y no prever medidas tecnológicas de protección respecto a la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas; y - Si la entrega de los ejemplares digitales para consulta y no sólo para	15

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

		depósito, respeta los principios de autorización previa del autor.	
VII	DECISIÓN	PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa.	39

**AMPARO EN REVISIÓN: 278/2022
QUEJOSA Y RECURRENTE:**

Vo. Bo.
Ministra

PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

**SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS,
JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Y
JOSÉ LUIS MEDEL GARCÍA**

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ***** de ***** de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el **amparo en revisión 278/2022** interpuesto por ***** en contra de la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno¹, por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de **amparo indirecto** *****.

Los problemas jurídicos por resolver por esta Primera Sala consisten en determinar si:

- La **Ley General de Bibliotecas** viola los derechos de propiedad intelectual por **no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor**;

¹ Firmada el cinco de noviembre de dos mil veintiuno

- La **entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas** respeta los derechos patrimoniales de los autores y editores; y
- La **entrega de los ejemplares digitales para consulta y no sólo para depósito** vulnera los principios de autorización previa ante la divulgación, retribución y seguridad jurídica.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. **Hechos.** De las constancias que obran en el expediente se desprenden los siguientes antecedentes.
2. La persona jurídica denominada ********* es una empresa que se dedica a la elaboración, edición, producción, publicación y distribución de libros, revistas y publicaciones en general, así como materiales audiovisuales, casetes multimedia, así como la ejecución de actos relacionados con dichos fines; la adquisición y explotación de derechos de propiedad intelectual entre los que se encuentran los derechos de autor.
3. El primero de junio de dos mil veintiuno², se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Bibliotecas, cuyos objetivos esencialmente consisten en establecer las base de coordinación de los gobiernos de todos los niveles en materia de bibliotecas públicas; definir las políticas de su establecimiento, sostenimiento y organización; definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas; fomentar la formación de

²

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619932&fecha=01/06/2021#gsc.tab=0

bibliotecas por parte de los sectores social y privado; fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental; y, regular los términos del depósito legal³.

4. **Demanda de amparo.** El nueve de julio de dos mil veintiuno, ***** promovió un juicio de amparo indirecto⁴, en el que reclamó manera destacada los artículos 1, 2 fracción V, 5 fracción III, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 27, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44, de la Ley General de Biblioteca, al estimar que su expedición viola los derechos de autor consagrado en la Constitución Federal, así como en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano.
5. El texto de las **normas reclamadas** es el siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Establecer las bases de coordinación de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, los municipios y

³ **Artículo 1.** La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Establecer las bases de coordinación de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de bibliotecas públicas;

II. Definir las políticas de establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas;

III. Definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas;

IV. Proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas;

V. Fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado;

VI. Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo, y

VII. Regular los términos del Depósito Legal.

⁴ En la demanda señaló como autoridades responsables al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura y el Director General del Diario Oficial de la Federación. De tales autoridades les reclamó en el ámbito de sus respectivas competencias la discusión, aprobación, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de la Ley General de Bibliotecas.

alcaldías de la Ciudad de México en materia de bibliotecas públicas;

II. Definir las políticas de establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas;

III. Definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas;

IV. Proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas;

V. Fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado;

VI. Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo, y

VII. Regular los términos del Depósito Legal.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

[...]

V. Biblioteca pública: Biblioteca que presta servicios de consulta al público en general, de forma gratuita y sin discriminación y que, con base en los recursos a su disposición, desarrolla otras actividades que incluyen, préstamo a domicilio o interbibliotecario, fomento de la lectura, formación cultural, educativa y de uso de tecnologías de la información y comunicación, además de orientación e información bibliográfica y documental, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y disfrutar de la información y el conocimiento.

[...]

Artículo 5. Los servicios culturales complementarios de una biblioteca pública permiten a sus usuarios adquirir, transmitir, acrecentar y conservar el conocimiento en todas las ramas del saber. Estos servicios consistirán en al menos:

[...]

III. Disponibilidad de salas de lectura y trabajo con conexión gratuita a Internet y medios audiovisuales;

[...]

Artículo 6. Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios bibliotecarios sin más límite que los establecidos por las disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública. Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a dichos servicios, con independencia del uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso.

Para fines estadísticos o de reconocimiento al trabajo de la institución a cargo del acervo, los responsables de las bibliotecas públicas podrán solicitar a la persona usuaria información sobre las fuentes de consulta, el tema de su investigación y si tiene planeado hacerla pública.

Artículo 8. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General de Bibliotecas, proponer, ejecutar y evaluar la política nacional de bibliotecas atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo y demás programas correspondientes, así como el diseño y propuesta de normas técnicas y reglamentarias para la conservación, clasificación, registro, consulta y visita pública de las bibliotecas.

Artículo 9. Los gobiernos Federal, de las entidades federativas, así como de los municipios y alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones, promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de bibliotecas públicas, impulsando el establecimiento, equipamiento, mantenimiento y actualización permanente de un área de servicios de cómputo y los servicios culturales complementarios que a través de éstas se otorguen.

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, a través de la Dirección General:

I. Coordinar la Red;

II. Establecer los mecanismos participativos para planear y programar la expansión y modernización tecnológica de la Red;

III. Emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas integradas a la Red, y supervisar su cumplimiento;

IV. Operar un programa de capacitación y certificación de bibliotecarias y bibliotecarios de las bibliotecas públicas a nivel nacional;

- V. Establecer criterios para la selección, integración y desarrollo de las colecciones de las bibliotecas públicas;
- VI. Enviar a las bibliotecas integradas a la Red dotaciones de nuevos materiales;
- VII. Enviar a las bibliotecas integrantes de la Red los materiales bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las normas técnicas bibliotecológicas autorizadas por la propia Dirección General, a efecto de que los servicios bibliotecarios puedan ofrecerse con mayor eficiencia;
- VIII. Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, el servicio de catalogación de acervos complementarios que adquiera una biblioteca de la Red;
- IX. Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, apoyo técnico para el mantenimiento de los servicios informáticos de las bibliotecas integrantes de la Red;
- X. Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red;
- XI. Proporcionar, por sí o a través de otras instituciones, asesoría técnica en materia bibliotecaria e informática a las bibliotecas incluidas en la Red;
- XII. Registrar los acervos de la Red verificando que las bibliotecas cuenten con un catálogo a disposición del público, mismo que deberá ser consultable electrónicamente a través de una red de información pública, manteniendo un inventario y sistema de catalogación actualizado;
- XIII. Difundir a nivel nacional los servicios bibliotecarios y actividades afines de las bibliotecas que forman la Red;
- XIV. Llevar a cabo y fomentar investigaciones encaminadas al uso de los servicios bibliotecarios, tanto impresos como digitales, así como para incentivar el hábito de la lectura, y
- XV. Realizar las demás funciones que sean análogas o complementarias a las anteriores y que le permitan alcanzar sus propósitos.

Artículo 15. La Secretaría, a través de la Dirección General, de acuerdo con la necesidad de cada caso y con base en la disponibilidad presupuestal, proporcionará a las nuevas bibliotecas públicas, en formato impreso y digital, un acervo de publicaciones informativas, recreativas y formativas; así como obras de consulta y publicaciones periódicas, a efecto de que respondan a las necesidades culturales, educativas y de

desarrollo en general de los habitantes de la localidad en donde se establezca la nueva institución.

Artículo 19. Las editoriales del país podrán deducir impuestos a través de las donaciones que realicen en especie a la Dirección General en términos de lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, inciso a), y 151, fracción III, inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y 131 de su Reglamento, siempre y cuando las donaciones realizadas sean valoradas y, en su caso, aceptadas por la Secretaría.

Artículo 20. Las bibliotecas de los sectores social y privado que presten servicios con características de biblioteca pública en los términos de la presente Ley y que manifiesten su disposición a incorporarse a la Red nacional o a una de alguna entidad federativa, celebrarán con la Secretaría o con el gobierno de la entidad federativa un convenio de adhesión. En su caso, podrán solicitar que luego de su adhesión, les sean aportados materiales de los mencionados en el artículo 15 de esta Ley.

Artículo 27. La Secretaría, a través de la Dirección General, propondrá reglas para fomentar y coordinar el préstamo interbibliotecario a nivel nacional, vinculando a las instituciones integrantes de la Red y el Sistema entre sí.

Artículo 33. Se declara de interés público la recopilación, integración, almacenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuida para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impreso o electrónico, analógico o digital, en el territorio nacional. El conjunto de obras recopiladas constituye el Depósito Legal.

Artículo 37. Todos los editores y productores de los materiales mencionados en los artículos 33 y 34 de esta Ley, deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producciones, de acuerdo con lo siguiente:

- I.** Dos ejemplares a la Biblioteca de México;
- II.** Dos ejemplares a la Biblioteca del Congreso de la Unión,
y
- III.** Dos ejemplares a la Biblioteca Nacional de México.

En el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.

Artículo 38. Cada uno de los repositorios del Depósito Legal, establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con base en las disposiciones aplicables.

Artículo 39. Los materiales a que se refiere el artículo 37, se entregarán dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.

Artículo 40. Las instituciones receptoras del Depósito Legal deberán:

- I. Recibir los materiales objeto de Depósito Legal;
- II. Expedir a la editora o productora constancia que acredite la recepción de los materiales, las que contendrán los datos básicos que permitan la identificación fiscal de la editora o productora;
- III. Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, en su caso, de consulta pública;
- IV. Verificar que las editoriales cumplan con sus obligaciones sobre el Depósito Legal, y
- V. Publicar e informar anualmente la estadística de los materiales recibidos.

Artículo 42. El Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura enviará mensualmente a las instituciones receptoras del Depósito Legal una relación en formatos automatizados de las publicaciones a las que fue asignado el Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) y el Número Internacional Normalizado de Publicaciones Periódicas (ISSN), con objeto de facilitar la verificación del cumplimiento de la obligación consignada en la presente Ley.

Artículo 43. Los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 de esta Ley, se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público de los materiales no entregados. La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales.

Artículo 44. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará efectivas las sanciones administrativas que correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables, y el monto que se recaude por concepto de multas se integrará en un fondo para el fortalecimiento de los propósitos de Depósito Legal.

6. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, la quejosa hizo valer esencialmente lo siguiente:

- La Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual por no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor y cuerpos normativos afines a la materia, y no prever medidas tecnológicas de protección, y por violar la normal explotación de la obra.
- La entrega de copias digitales para su divulgación en las redes implementadas para los depositarios carece de controles para evitar el uso ilegal de los materiales, por lo que se viola los derechos patrimoniales de los autores y editores.
- La entrega de los ejemplares publicados en formato electrónico, analógico o digital, prevista en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley General de Bibliotecas, vulnera el principio de autorización previo a la divulgación y consecuente retribución.
- El artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional al prever una multa fija y por tanto excesiva en caso de incumplimiento de entrega de los ejemplares relativos al depósito legal que prevé el artículo 37 de la misma ley.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

7. **Trámite y resolución del juicio de amparo**⁵. En el auto inicia, el juzgado admitió la demanda de amparo y requirió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran su informe justificado.
8. **Sentencia en el juicio de amparo indirecto.** El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el juzgado dictó la sentencia en la que, ante la negativa de actos no desvirtuada, **sobreseyó** en el juicio de amparo respecto de la Secretaría de Cultura; asimismo, **sobreseyó** por las normas reclamadas al determinar que la quejosa no demostró encontrarse en los supuestos para que le afectara la entrada en vigor de la Ley General de Bibliotecas.
9. **Recurso de revisión.** Inconforme con la anterior determinación, ********* interpuso un recurso de revisión, mediante el cual argumentó que la Ley General de Bibliotecas tiene naturaleza de autoaplicativa y le afecta con su sola entrada en vigor sus supuestos. En el escrito de agravios expuso esencialmente lo siguiente:
 - **Primer agravio.** Con su objeto social y al publicar una revista notoriamente conocida acredita ubicarse en los supuestos de la Ley General de Bibliotecas que es de naturaleza autoaplicativa.
 - **Segundo agravio.** Cuenta con interés jurídico y legítimo porque la Ley General de Bibliotecas le afecta con su entrada en vigor ya que le obliga a la entrega de los ejemplares para depósito legal.

⁵ El conocimiento del juicio de amparo indirecto correspondió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que en el acuerdo inicial del trece de julio de dos mil veintiuno lo radicó con el número de expediente *********.

- 10. Determinación del tribunal colegiado de circuito⁶.** El tribunal colegiado de circuito modificó la sentencia recurrida para efectos de subsistir el **sobreseimiento** decretado en el artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas que prevé la multa como sanción. En otro aspecto, por carecer de competencia originaria para resolver el resto de los artículos reclamados, ordenó remitir el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- 11. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Por acuerdo del Ministro Presidente de este alto tribunal del diez de junio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso y se ordenó su registro con el número de expediente 278/2022; asimismo, se asumió la competencia originaria para conocer del asunto, se admitió a trámite el recurso y ordenó su envío a la Primera Sala y su turno a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
- 12. Avocamiento.** En acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, la Presidenta de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y se ordenó el envío de los autos a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

I. COMPETENCIA

- 13.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo,

⁶ El conocimiento del recurso de revisión le correspondió al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de amparo en revisión 21/2022, y seguido el procedimiento lo resolvió en la sesión correspondiente al veintiséis de mayo de dos mil veintidós.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

fracción II, inciso A), Tercero, Quinto y Sexto del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal⁷. Lo anterior, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

14. Cabe señalar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que en forma ordinaria conoce esta Primera Sala en términos de lo dispuesto en el referido acuerdo y en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el primer párrafo del artículo 86 del reglamento citado dispone que al igual que los amparos en revisión, los amparos directos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros y Ministras de ambas Salas, de manera que si el recurso que se examina es de materia administrativa, se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro o Ministra para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto Tercero del referido Acuerdo Plenario 1/2023, esta Sala debe avocarse a su conocimiento y resolución.

II. OPORTUNIDAD

15. Es inconducente mayor pronunciamiento en torno a la oportunidad de la interposición del recurso de revisión, en virtud de que el tribunal colegiado del conocimiento resolvió esa cuestión.

⁷ Acuerdo general número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los tribunales colegiados de circuito.

III. LEGITIMACIÓN

- 16.** En cuanto a la legitimación de quien interpuso el recurso de revisión, el órgano jurisdiccional del conocimiento concluyó que fue por parte legitimada.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN

- 17.** El recurso de revisión es procedente en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en un juicio de amparo en el que se controvertió la constitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas. Por ende, se surten los extremos del punto tercero, en relación con el Segundo, fracción II, inciso A), del Acuerdo General Plenario 1/2023.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

- 18.** La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en representación de dicha Cámara, expone como causa de improcedencia y sobreseimiento la prevista en el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto, consistente en la expedición de la ley impugnada.
- 19.** El Tribunal Colegiado desestimo la causal hecha valer al considerar que la existencia de dicho acto se acredita a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
- 20.** En otro orden de ideas, la Subdirectora de Área de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, en representación del Presidente de la República y la Cámara de Diputados, por

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

conducto del Subdirector Jurídico, plantean como causa de improcedencia y motivo de sobreseimiento la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que bajo su criterio el Decreto impugnado tiene el carácter de heteroaplicativo; es decir, se trata de normativa de individualización condicionada. El Tribunal Colegiado desestimó parcialmente dicha causa en su determinación al estimar que el artículo 43, que prevé una sanción, por lo que requiere la actualización de una conducta por parte de los sujetos a los que se dirige la ley (acto de aplicación), estimó que la normativa cuestionada es de naturaleza autoaplicativa.

- 21.** La Subdirectora de Área de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, con la representación que ostenta, expone como diversa causa de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa a que la quejosa no acreditó su interés legítimo para accionar el juicio. El Colegiado desestimó la causa al analizar que la quejosa sí contaba con interés jurídico para controvertir los preceptos impugnados.
- 22.** Por otra parte, la Subdirectora de Amparos en representación de la Cámara de Diputados adujo como causa de improcedencia que los actos reclamados son consumados de modo irreparable. Al respecto, el Tribunal Colegiado señaló que la normatividad reclamada no puede estimarse consumada (en cuanto a sus efectos) de manera irreparable, dado que, eventualmente, de concederse el amparo a la quejosa, ello permitiría desincorporar de su esfera jurídica las previsiones ahí contenidas, lo que se traduce en que no entregue ejemplares de todas sus ediciones y producciones, además de que, en el caso de obras públicas en formatos electrónicos, análogos o digitales, no entregue el ejemplar a cada institución receptora.

23. Por último, la Subdirectora de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados señaló que se actualizaba la causa de improcedencia relacionada con la falta de interés jurídico y legítimo que se genera cuando un particular acude al juicio de amparo a reclamar actos futuros e inciertos; causa que fue desestimada ya que, además de que la normativa no es futura ni incierta en tanto que en la actualidad se encuentra en vigor, y en la porción analizada es de naturaleza autoaplicativa; por lo que respecta al interés jurídico, el tribunal señaló que éste quedó demostrado en los términos precisados.
24. Además de las causas de improcedencia analizadas por el Tribunal Colegiado, no se advierte una causa de improcedencia distinta, ni aprecia un matiz distinto o por motivo diverso, por lo que corresponde emprender el estudio de fondo del asunto

VI. ESTUDIO DE FONDO

Los problemas jurídicos por resolver por esta Primera Sala consisten en determinar si:

- La **Ley General de Bibliotecas** viola los derechos de propiedad intelectual por **no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y no prever medidas tecnológicas de protección respecto a la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas;** y
- Si la **entrega de los ejemplares digitales para consulta y no sólo para depósito,** respeta los principios de autorización previa del autor.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

25. En ese sentido, para resolver cada problema jurídico se recurre a establecer: **(i)** El planteamiento de la parte quejosa, **(ii)** El parámetro de regularidad aplicable y **(iii)** El análisis del caso concreto.
26. Por cuestión de método, dichos argumentos se analizarán en un orden diferente al propuesto y, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo⁸, algunos se estudiarán de manera conjunta debido a su estrecha relación.

Por tanto, la estructura del asunto es la siguiente:

- A.** Determinar si la Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual al no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la normativa internacional, y no prever medidas tecnológicas de protección, en relación con la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas.
- B.** Determinar si la entrega de los ejemplares para consulta y no sólo para depósito respeta los principios de autorización previa del autor.
- 27. A. Determinar si la Ley General de Bibliotecas viola los derechos de propiedad intelectual al no incluir las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la normativa internacional, y no prever medidas**

⁸ **Artículo 76.** El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.

tecnológicas de protección, en relación con la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas.

28. En la demanda de amparo, la quejosa señaló la violación de los artículos 1, 28, en relación con el artículo 73, fracción XXV, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que el Congreso omitió legislar adecuadamente la Ley General de Bibliotecas, al vulnerar los derechos de propiedad intelectual de la quejosa, dejando de incorporar las excepciones y limitaciones contempladas en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que devienen de la normativa internacional, y al no prever medidas tecnológicas de protección, así como por violar la normal explotación de la obra.
29. En ese sentido, que la Ley General de Bibliotecas no contiene dispositivos de armonización normativa con la Ley Federal del Derecho de Autor, ni tampoco prevé una remisión a este último ordenamiento legal, por lo tanto, es imposible aplicar en virtud del silencio del legislador respecto de situaciones que no tuvo la intención de establecer en la ley.
30. Los conceptos de violación son **infundados**.
31. En primer término, se precisa que los artículos constitucionales referidos prevén, en esencia que lo siguiente:
 - **Artículo 1**, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

- Por su parte, el **Artículo 28**, en su párrafo décimo, señala que no constituirán monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
- El diverso **73, fracción XXV**, establece la facultad del Congreso de establecer, organizar y sostener en toda la República los institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, entre los que se enuncian las bibliotecas; asimismo, se establece la facultad de legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.
- Por último, el **artículo 133** prevén la supremacía de la Constitución, de las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y de los tratados que estén de acuerdo con la misma.

32. En el plano de regulación internacional, el derecho a la cultura está previsto en los siguientes instrumentos convencionales de los que México es parte.

33. La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales se definió a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Por ende, se precisó que la cultura engloba las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias⁹.

⁹ Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, *Declaración de México sobre las Políticas Culturales*, 26 de julio a 6 de agosto de 1982.

La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se celebró en la Ciudad de México con la participación de 126 países de los 158 que en ese momento formaban parte de UNESCO. El resultado de MONDIACULT fue la adopción de la Declaración de México sobre las Políticas Culturales.

34. En ese sentido la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, pues por medio de esta, se disciernen los valores. A través de la cultura, el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se cuestiona y crea obras que lo trascienden¹⁰.
35. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la **Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural**¹¹, señaló que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarcan las artes, las letras, los estilos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, tradiciones y creencias. De esta manera, **la cultura constituye un patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras**¹².
36. Finalmente, la Declaración de Friburgo¹³ define a la cultura como el conjunto de los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, las instituciones y los modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo

¹⁰ *Ídem.*

¹¹ UNESCO, *Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural*, Resolución aprobada el dos de noviembre de dos mil uno, en la 31ª Conferencia General.

¹² **Artículo 1 La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad**

La cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

¹³ La Declaración de Friburgo fue redactado para la UNESCO por un grupo internacional de trabajo conocido como el “Grupo de Friburgo” organizado a partir del Instituto Interdisciplinario de Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Friburgo, Suiza.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo¹⁴.

37. Ahora bien, el derecho a la cultura ha sido consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; así como en el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Política del país.
38. El primer instrumento internacional en el que se hizo referencia al derecho a la cultura es la **Declaración Universal de Derechos Humanos**¹⁵, en particular, en sus artículos 22 y 27. Dichos artículos establecen que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Así, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

¹⁴ **Artículo 2 (definiciones) Para los fines de la presente Declaración:**

- a. El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo;
- b. La expresión "identidad cultural" debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad ;
- c. Por "comunidad cultural" se entiende un grupo de personas que comparten las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que desean preservar y desarrollar.

¹⁵ Asamblea General de las Naciones Unidas, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III)

39. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a: i) participar en la vida cultural; ii) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; iii) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; y iv) la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
40. Asimismo, el Pacto Internacional señala que, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura.
41. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Número 21, recalcó que la promoción y respeto de los derechos culturales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural¹⁶.
42. De igual forma, el Comité señaló que para ejercer el derecho a participar en la vida cultural es necesario que el Estado tome medidas positivas como asegurarse de que existan las condiciones previas para hacerlo, promoverla, facilitarla, y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos. En ese sentido, el derecho a participar en la vida cultural está compuesto por: i) la participación en la vida cultural; ii) el acceso a la vida cultural; y iii) la contribución a la vida cultural¹⁷.

¹⁶ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observación General No. 21. Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, 21 de diciembre de 2009, E/C.12/GC/21, párr. 1.

¹⁷ *Ibidem*, párr. 15.-

43. Para efectos del presente caso es relevante el acceso a la vida cultural, el cual comprende el derecho de toda persona a conocer y comprender su propia cultura y la de otros. Es decir, toda persona tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión por cualquier medio tecnológico de información y comunicación, así como a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.
44. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó que el derecho a participar en la vida cultural debe ser disponible y accesible. La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular, **bibliotecas**, museos, teatros, salas de cine, etcétera; mientras que la accesibilidad implica disponer de oportunidades efectivas y concretas para que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de todas las personas¹⁸.
45. En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, señala que los Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados¹⁹.

¹⁸ *Ibidem*, párr. 16.

¹⁹ **Artículo 26. Desarrollo Progresivo**

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

46. De igual forma, el artículo 14.1 del Protocolo de San Salvador reconoce el derecho a la cultura en los mismos términos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad; a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora²⁰.
47. Por su parte, el artículo 20.65 del T-MEC, establece las limitaciones y excepciones que cada parte (Estado) circunscribirá a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos
48. El diverso 20.67 establece lineamientos con el fin de proporcionar protección legal adecuada y recursos legales efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relación con el ejercicio de sus derechos y que restringen actos no

²⁰ **Artículo 14.** Derecho a los beneficios de la cultura

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
 - a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
 - b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
 - c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

AMPARO EN REVISIÓN 278/2022

autorizados con respecto a sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas.

49. En el ámbito nacional, el artículo 4º, párrafo doce, de la Constitución Política del país establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Por lo tanto, dicho artículo precisa que el Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y a las expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, para lo cual, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
50. En ese sentido, del artículo constitucional citado anteriormente, se advierte el reconocimiento del acceso, la promoción, la difusión, el respeto y la protección de la cultura, en sentido amplio.
51. En virtud de lo anterior esta Primera Sala considera que el derecho a la cultura tiene tres vertientes o facetas: **i)** como un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales; **ii)** como un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y **iii)** como un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente²¹.

²¹ Amparo directo 11/2011, resuelto el dos de mayo de dos mil doce, por mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente). En contra, Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Amparo en revisión 566/2015, resuelto el quince de febrero de dos mil diecisiete, por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ministra Norma Lucía Piña Ramos. En contra, Ministro José Ramón Cossío Díaz. Ausente, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

De este asunto derivó la tesis 1a. CXXI/2017 (10a.) de rubro “**DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. ES UNA VERTIENTE DEL DERECHO A LA CULTURA.** La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos organismos internacionales han sostenido que el derecho a la cultura es un derecho polifacético que considera tres vertientes: 1) un derecho que

- 52.** Derivado de lo anterior el Estado debe garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en el aspecto individual (como elemento esencial de la persona), como en el colectivo y social, dentro de la cual debe entenderse comprendida la difusión de múltiples valores, tanto históricos, tradicionales, populares y la obra de los artistas, escritores, y científicos del país, entre muchas manifestaciones del quehacer humano con un carácter formativo de la identidad en ambos aspectos: individual y social o nacional.
- 53.** El derecho a la cultura es inherente a la dignidad de la persona humana, por lo que debe interpretarse acorde con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, debiéndose garantizar tanto su acceso como a su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo colectivo como en lo individual.
- 54.** Dicho derecho no es absoluto o irrestricto, sino que encuentra ciertos límites, cuando genera una relación con el ejercicio de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos también protegidos de manera constitucional, por ejemplo el sano desarrollo de la infancia, la libertad de creencias, de reunión o de tránsito, todo lo cual estará

tutela el acceso a los bienes y servicios culturales; 2) un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y, 3) un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que la realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, la presencia de bienes y servicios culturales que todas las personas puedan aprovechar, como bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura y las artes en todas sus manifestaciones. De esta manera, esas fuentes son consistentes en entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho prestacional a tener acceso a bienes y servicios culturales.”

en su caso, sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate²².

55. Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló, en la citada Observación General Número 21, que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas para lograr que se respete el derecho de toda persona a tener acceso a su patrimonio cultural y lingüístico y al de otras personas.
56. El patrimonio cultural ha sido definido como “*el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras*”. Por lo tanto, el patrimonio cultural comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y las **bibliotecas**²³.

²² Tesis 1a. CCVII/2012 (10a.) de rubro y *contenido*: “**DERECHO FUNDAMENTAL A LA CULTURA.** El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es **inherente a la dignidad de la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad** a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso, como su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa no contiene límites internos, como todos los derechos **encuentra ciertos límites de manera externa, que implica su relación con el ejercicio de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos** también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.”

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, tomo 1, página 502, derivada del amparo directo 11/2011, véase *supra* nota 26.

²³ Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, *Declaración de México sobre las Políticas Culturales*, *op. cit.* párr. 23, véase *supra* nota 14.

57. Así, el patrimonio cultural debe ser preservado, desarrollado, enriquecido y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad y alentar un verdadero diálogo entre las culturas²⁴.
58. Ahora bien, por cuanto hace a la Ley General de Bibliotecas, es necesario referir que los artículos reclamados prevén que la ley es de observancia general en toda la República; que sus disposiciones son de orden público e interés social y que tiene por objeto, entre otros, fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.
59. Señalan que los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios bibliotecarios sin más límite que los establecidos por las disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública. Además, que los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a dichos servicios, con independencia del uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso.
60. Establecen que para fines estadísticos o de reconocimiento al trabajo de la institución a cargo del acervo, los responsables de las bibliotecas públicas podrán solicitar a la persona usuaria

²⁴ Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural **Artículo 7. Patrimonio Cultural fuente de creatividad.**

La creatividad tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Por esta razón el patrimonio, en todas sus formas, debe preservarse, valorizarse y transmitirse a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y aspiraciones humanas, a fin de estimular la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre culturas.

información sobre las fuentes de consulta, el tema de su investigación y si tiene planeado hacerla pública.

- 61.** Indican que las obras a que se refiere podrán ser, de manera enunciativa y no limitativa, los libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos; las publicaciones periódicas como periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias; el material cartográfico como mapas y planos, cartas de navegación, aeronáuticas o celestes; partituras; fonogramas, discos y cintas; obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías; material gráfico, carteles y diagramas; y cualquier otra que se considere relevante para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional.
- 62.** Detallan la manera en que todos los editores y productores de los materiales mencionados en los artículos 33 y 34 de esa Ley, deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producción, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.
- 63.** Asimismo, prevén que, en el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.
- 64.** Regulan que cada uno de los repositorios del Depósito Legal, establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con base en las disposiciones aplicables.

65. Y mencionan que las instituciones receptoras del Depósito Legal deberán, entre otras cuestiones, establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, en su caso, de consulta pública.
66. En el caso, la quejosa cuestiona la constitucionalidad de la Ley Federal de Bibliotecas, en especial los artículos 6, 12 y 15, por la no inclusión de las excepciones y limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, y no prever medidas tecnológicas de protección, en relación a la entrega de copias digitales para su divulgación en la red de bibliotecas.
67. Lo infundado del concepto de violación radica en que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, en relación con el Proyecto de derecho por el que se expide la Ley General de Bibliotecas²⁵, se señaló en las consideraciones trigésima séptima a trigésima novena, lo siguiente:

“TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Una vez que los editores cumplen con la responsabilidad de entregar a las instituciones señaladas en el Decreto las ediciones publicadas, éstas se constituyen en bienes de dominio público y, conforme a la Ley de Bienes Nacionales, pasan a ser patrimonio público que, de conformidad con la naturaleza jurídica de cada institución depositaria, tendrán características diferentes. En ese sentido, el párrafo cuarto del artículo 4. de esa ley, establece que los bienes inmuebles de las instituciones a las que la Constitución otorga autonomía establecerán, de conformidad con sus leyes, las disposiciones que regularán los actos, en este caso, de administración y control. No obstante, aquellos acervos, libros o documentos en resguardo de aquellas instituciones que, por sus cualidades, constituyan monumentos históricos, estarán sujetos a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y la autoridad competente, para ciertos efectos de su preservación, será el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

²⁵ Consultable en https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-11-27-1/assets/documentos/Dict_Cultura_Ley_General_Bibliotecas.pdf

TRIGÉSIMA OCTAVA. De la misma forma, **los libros o publicaciones, sin distinción de acervos o bibliotecas, para efectos de su consulta, copia, digitalización y, en su caso, reproducción, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual establece disposiciones específicas para los autores y los titulares de los derechos conexos (editores, diseñadores e ilustradores, entre otros).** En el caso de los libros integrados a los acervos públicos por la vía del Depósito Legal, su consulta, incluso, será específica al ejemplar entregado y, salvo licencias convenidas con los titulares de los derechos, sólo podrá ser objeto de digitalización para fines de conservación, salvo aquellos cuyos derechos han expirado o se encuentran en condición de dominio público.

TRIGÉSIMA NOVENA. Los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen **no omiten señalar que estas disposiciones están vigentes y que la naturaleza de la Ley General de Bibliotecas no requiere de reproducir los preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos ni de la Ley Federal del Derecho de Autor, las cuales serán referenciadas como de aplicación supletoria a la Ley General de Bibliotecas** en las disposiciones generales a la misma, a efecto de ampliar la interpretación legal de manera sistemática respecto de los cuerpos normativos citados. (...)”

68. De lo anterior se advierte que el órgano legislativo expuso que los libros o publicaciones, sin distinción de acervos o bibliotecas, para efectos de su consulta, copia, digitalización y, en su caso, reproducción, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual establece disposiciones específicas para los autores y los titulares de los derechos conexos (editores, diseñadores e ilustradores, entre otros).
69. De hecho, en el referido Dictamen quedó plasmado que los integrantes de las comisiones no soslayaron que la naturaleza de la Ley General de Bibliotecas no requiere de reproducir los preceptos de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos

Arqueológicos, Artísticos e Históricos ni de la **Ley Federal del Derecho de Autor**.

70. En ese sentido, esta Primera Sala concluye que la intención del legislador es que, para efectos de consulta, copia, digitalización y, en su caso, reproducción, del material que los autores presenten, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual establece disposiciones específicas para los autores y los titulares de los derechos conexos (editores, diseñadores e ilustradores, entre otros), cuestión que no se contrapone a la intención del poder legislativo.
71. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de esta Primera Sala, de rubro: “INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA. PUEDE PREVALECCER INCLUSO SOBRE LO PRECISADO EN LAS EXPOSICIONES DE MOTIVOS O EN LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS, CUANDO RESULTE COHERENTE CON LA VOLUNTAD OBJETIVA QUE SUBYACE A LA NORMA.”.²⁶

²⁶ Tesis aislada 1a. II/2021 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, febrero de 2021, Tomo I, página 837. Registro digital: 2022675, del texto siguiente:

“Hechos: En una sentencia emitida en un juicio de amparo indirecto la Juez de Distrito, para atribuir el significado de un precepto, acudió a su interpretación sistemática con otro artículo del mismo ordenamiento, no obstante que en la exposición de motivos que dio origen a dicho precepto se hubiese señalado lo contrario.

Criterio jurídico: La interpretación sistemática de las normas que consiste en conferirles un significado, en atención al contexto normativo o marco legal en que se ubican, puede prevalecer, incluso, sobre el entendimiento subjetivo que el legislador les pretendió asignar a través de los trabajos preparatorios (exposiciones de motivos, dictámenes, opiniones, etcétera), siempre y cuando esa interpretación resulte coherente axiológicamente o afín a la voluntad objetiva que subyace a las normas.

Justificación: Lo anterior es así, porque la interpretación sistemática se pondera por encima de dicho entendimiento subjetivo, de modo que puede demostrarse racionalmente que la voluntad de la ley resulta diversa a la voluntad del legislador en la exposición de motivos o dictámenes que hayan dado origen a los preceptos materia de esa interpretación.”

- 72.** En ese sentido, de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé en sus artículos 114 Bis al Octies, un capítulo relativo a las medidas tecnológicas de protección, la información sobre la gestión de derechos y los proveedores de servicios de internet en la que se establecen los lineamientos en relación con la implementación de medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos.
- 73.** Dicha norma señala que se la medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor, artista, intérprete o ejecutante, productor o que controle el acceso a una obra, una interpretación o ejecución o a un fonograma y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunta a un ejemplar o figuren en relación con la comunicación al público de los mismos.
- 74.** Por lo anterior, resulta evidente que, si bien la Ley General de Bibliotecas no regula *per sé* las excepciones o limitaciones contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, y no prever medidas tecnológicas de protección, ello atiende a que son rubros que, precisamente, ya se encuentran regulados, cuestión que no es suficiente para tildar la norma de contraria a la Constitución, ya que no existe un vacío legal y, finalmente sí existen los mecanismos de protección que alega la parte quejosa.
- 75.** Lo anterior, es conforme al criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal sustentado en la tesis 2a./J. 60/2022 (11a.), de rubro “LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS. EL MANEJO Y RESGUARDO DE LAS OBRAS Y LOS MATERIALES PROPORCIONADOS AL DEPÓSITO LEGAL DE PUBLICACIONES EN TÉRMINOS DE ESE ORDENAMIENTO, ES ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA

INSTITUCIÓN DEPOSITARIA.”²⁷, en el cual se sostiene que el sistema normativo que regula el depósito legal de publicaciones integrado, entre otros, por los artículos 1, fracción VI, 6, 34, 37, 38, 39 y 40, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas, opera sobre la base del debido acatamiento a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor. Por tanto, si en términos de dicho sistema normativo las obras y los materiales proporcionados por los autores al depósito legal, deben contar con salvaguardas y medidas de protección eficaces, incluso de tipo tecnológico, entonces, queda bajo la estricta responsabilidad de la institución depositaria su debido manejo y resguardo, pues existe la obligación a su cargo de respetar los derechos de autor y conexos.

76. Con lo anterior, queda demostrado lo infundado del concepto de violación en estudio.
77. **B. Determinar si la entrega de los ejemplares para consulta y no sólo para depósito respeta los principios de autorización previa del autor.**
78. Al respecto, la quejosa hizo valer como concepto de violación que el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley General de Bibliotecas, referente a las obras publicadas en formato electrónico, analógico o digital y su entrega en un solo ejemplar, por la naturaleza de los repositorios (digitales) y sin que exista control sobre su acceso por parte del público, vulnera el principio de autorización previsto en el artículo 6.1 del Tratado sobre Derecho de Autor, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

²⁷ Publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, página 2320. Registro digital: 2025330. Consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025330>

79. El concepto de violación es **infundado**.

80. El artículo convencional invocado por la quejosa señala lo siguiente:

Artículo 6

Derecho de distribución

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

81. En efecto, el **artículo 37** en comento, establece lo siguiente:

Artículo 37. Todos los editores y productores de los materiales mencionados en los artículos 33 y 34 de esta Ley, deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producciones, de acuerdo con lo siguiente:

I. Dos ejemplares a la Biblioteca de México;

II. Dos ejemplares a la Biblioteca del Congreso de la Unión, y

III. Dos ejemplares a la Biblioteca Nacional de México.

En el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.

82. Por su parte, el **artículo 38**, prevé lo siguiente:

Artículo 38. Cada uno de los repositorios del Depósito Legal, establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con base en las disposiciones aplicables.

83. Además, el **artículo 40**, señala lo que se cita a continuación:

Artículo 40. Las instituciones receptoras del Depósito Legal deberán:

I. Recibir los materiales objeto de Depósito Legal;

II. Expedir a la editora o productora constancia que acredite la recepción de los materiales, las que contendrán los

datos básicos que permitan la identificación fiscal de la editora o productora;

III. Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, en su caso, de consulta pública;

IV. Verificar que las editoriales cumplan con sus obligaciones sobre el Depósito Legal, y

V. Publicar e informar anualmente la estadística de los materiales recibidos.

- 84.** Conforme a lo considerado en esta sentencia, resulta evidente que, para efectos del material que se entreguen al Depósito Legal²⁸, deberán regularse conforme a lo previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual, en sus artículos 21, y 27, señala los derechos de los titulares.

Artículo 21.- Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I. **Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;**

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;

IV. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda

²⁸ El artículo 33 de la Ley General de Bibliotecas lo define como el conjunto de obras recopiladas; el artículo 34 señala que estas pueden ser, las siguientes: I. Libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos; II. Publicaciones periódicas como periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias; III. Material cartográfico como mapas y planos, cartas de navegación, aeronáuticas o celestes; IV. Partituras; V. Fonogramas, discos y cintas; VI. Obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías; VII. Material gráfico, carteles y diagramas, y VIII. Cualquier otra que se considere relevante para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional.

atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

Artículo 27.- Los titulares de los derechos patrimoniales podrán **autorizar** o prohibir:

I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

Fracción reformada DOF 23-07-2003

II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:

a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas;

Inciso reformado DOF 01-07-2020

c) El acceso público por medio de la telecomunicación, incluida la banda ancha e Internet, y

Inciso reformado DOF 01-07-2020

d) La puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Inciso adicionado DOF 01-07-2020

III. La transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra óptica;

c) Microondas;

d) Vía satélite, o

e) Cualquier otro medio conocido o por conocerse.

Inciso reformado DOF 23-07-2003

IV. La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación. Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley;

V. La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización;

VI. La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y

VII. Cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los concesionarios de radiodifusión de permitir la retransmisión de su señal y de la obligación de los concesionarios de televisión restringida de retransmitirla en los términos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y sin menoscabo de los derechos de autor y conexos que correspondan.

Párrafo adicionado DOF 14-07-2014

- 85.** De lo anterior, se advierte que la legislación prevé el derecho del autor de autorizar o no, que sus publicaciones u obras que formen parte del depósito legal puedan ser consultadas, puestas a disposición y, en su caso, digitalizadas únicamente para fines de conservación, cuestión que no se antepone a la Ley General de Bibliotecas.
- 86.** La misma ley, en su artículo 33, declara de interés público la recopilación, integración, almacenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuida para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impreso o electrónico, analógico o digital en el territorio nacional, constituyendo el Depósito Legal, el conjunto de las obras recopiladas.
- 87.** Por su parte, el artículo 34 señala que estas pueden ser, las siguientes: I. Libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos; II. Publicaciones periódicas como periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias; III. Material cartográfico como mapas y planos, cartas de navegación, aeronáuticas o celestes; IV. Partituras; V. Fonogramas, discos y cintas; VI. Obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías; VII.

Material gráfico, carteles y diagramas, y VIII. Cualquier otra que se considere relevante para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional.

- 88.** Con lo anterior, se advierte que la legislación impugnada no es contraria a la Constitución General, ni al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor que hace valer la quejosa.
- 89.** El artículo 6 del tratado de referencia prevé que los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.
- 90.** Como se ha analizado, la Ley Federal del Derecho de Autor, como disposición aplicable y regulatoria de los derechos de los autores, conforme lo ordena la ley impugnada, no solo no contraviene el precepto convencional señalado por la quejosa, sino que establece el derecho de los autores a determinar si su obra será divulgada, y de autorizar, en su caso, la publicación del mismo, así como las medidas que se deberán implementar para su consulta, de ahí lo infundado de su manifestación.
- 91.** Por último, esta Primera Sala no se pronunciará en relación al concepto de violación hecho valer en el sentido de que el artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional al prever una multa fija y por tanto excesiva en caso de incumplimiento de entrega de los ejemplares relativos al depósito legal que prevé el artículo 37 de la misma ley.
- 92.** Toda vez que el tribunal colegiado de circuito, al emitir su determinación modificó la sentencia recurrida para efectos de

subsistir el **sobreseimiento** decretado en el artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas que prevé la multa como sanción.

VII. DECISIÓN

93. Por lo expuesto, expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

RESUELVE:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La justicia de la unión **no ampara ni protege a *******, contra los artículos 1, 2 fracción V, 5 fracción III, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 27, 33, 37, 38, 39, 40 y 42 de la Ley General de Bibliotecas.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

En términos de lo previsto en los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que se encuentra en esos supuestos normativos.